

C.A. de Santiago

Santiago, veinte de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Julia Pánez Pérez, abogada, Directora Jurídica, en representación de la I. Municipalidad de Santiago, quien interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Superintendencia de Educación Metropolitana, por haber dictado la Resolución Exenta PA N° 1191, de 29 de octubre de 2024, que rechazó el reclamo administrativo que dedujo en contra de la Resolución Exenta N° 2023/PA/13/1722, de 18 de julio de 2023, que dispuso sancionar al sostenedor municipal con una multa de 60 UTM por infracciones a la normativa educacional, y solicita que se acoja el presente reclamo declarando la ilegalidad de la sanción impuesta, dejándola sin efecto.

Expone que el 29 de abril de 2022 se notificó a la I. Municipalidad de Santiago una solicitud de antecedentes respecto del caso denuncia CAS-11395-J5F8F1, relacionado con la aplicación del protocolo en caso de autoagresión, ideación suicida, acto suicida y protocolo de reingreso de la estudiante LRA del establecimiento educacional Liceo Javiera Carrera. En respuesta a dicha solicitud, el 5 de mayo de 2022, la Municipalidad remitió antecedentes y evidencias de activación del protocolo antes referido.

Asimismo, indica que el 22 de junio de 2022 se notificó otra solicitud de antecedentes en el caso denuncia CAS-16244-K6Q5P2, referente a temas de infraestructura del establecimiento educacional ya mencionado, frente a lo cual también remitió -mediante correo electrónico- antecedentes y evidencias relacionadas al caso.

Continúa relatando que el 14 de septiembre de 2022 se notificó el Acta (Fiscalización o Denuncia) N° 221302331, con observaciones subsanables, en el marco de las denuncias mencionadas. En respuesta, el 23 de septiembre de 2022, remitió evidencias que subsanaban las observaciones aludidas. No obstante, el 13 de octubre de 2022 se levantó Acta de Observaciones no subsanadas N° 221303177, que devino en que la Superintendencia de Educación dictara la Resolución Exenta N° 2022/PA/13/2559, de 18 de octubre de 2022, ordenando instruir un procedimiento administrativo.

Señala que, posteriormente, con fecha 7 de noviembre de 2022, se notificó la Resolución N° 2022/FC/13/1042 mediante la cual se formularon tres cargos en contra del sostenedor municipal, consistentes en que: 1) el sostenedor no cumple con los requisitos mínimos exigidos para el uso de los servicios higiénicos del establecimiento; 2) el establecimiento presenta



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JKNXXUKMQQQ

infraestructura riesgosa, en mal estado de conservación y limpieza, y 3) el sostenedor no aplica correctamente su reglamento interno y/o protocolos.

Frente a tales imputaciones, la Municipalidad evacuó sus descargos mediante ORD N° 110, de 29 de noviembre de 2022, argumentando -respecto de los dos primeros cargos- que se subsanaron completamente las observaciones que dieron origen a su formulación, con la consecuente inexistencia de los hechos imputados. Además sostuvo que, en atención al principio de proporcionalidad, correspondía por ellos, a lo más, una sanción de amonestación por escrito; pues, al haberse subsanado lo observado, ya no existía afectación de bien jurídico alguno.

Con fecha 21 de julio de 2023, se notificó la Resolución Exenta N° 2023/PA/13/1722, de 18 de julio de 2023, que aprobó el procedimiento administrativo sólo en cuanto a los primeros dos cargos aludidos; disponiendo el sobreseimiento respecto del tercer cargo, por haber operado a su respecto la prescripción extintiva. Dicha resolución impuso una sanción de multa de 60 UTM, la que "no podrá ser inferior al 5% ni exceder el 50% de la subvención mensual por alumno matriculado".

Ante ello, la Municipalidad reclamante interpuso reclamación administrativa mediante ORD N° 175, de 23 de agosto de 2023, argumentando principalmente dos aspectos: primero, que la Superintendencia de Educación se extralimitó en sus facultades legales al sancionar hechos cuya fiscalización corresponde a la autoridad sanitaria o Servicio de Salud Metropolitano; y, segundo, que incurrió en una infracción al principio de tipicidad al calificar erróneamente la gravedad de las infracciones.

Finalmente, la Superintendencia de Educación dictó la Resolución Exenta PA N° 1.191, de 29 de octubre de 2024, rechazando la reclamación interpuesta y manteniendo la multa de 60 UTM.

En cuanto al derecho, sostiene que la Resolución sancionatoria incurre en dos ilegalidades.

En primer lugar, argumenta que la Superintendencia de Educación no cuenta con la facultad legal para sancionar al sostenedor por el eventual incumplimiento de las normas a las que se refieren el Decreto N° 289, de 1989, y el Decreto Supremo N° 594, de 1999, ambos del Ministerio de Salud, que fundamentaron los cargos N° 1 y N° 2 confirmados.

Reconoce que, de acuerdo con el artículo 15 del Decreto Supremo N° 315, de 2010, del Ministerio de Educación, el sostenedor debe acreditar que el local escolar cumple con la normativa vigente en materia de infraestructura,



contenida en el Decreto Supremo N° 548, de 1988, debiendo asegurar que el local reúne las condiciones sanitarias mínimas exigidas por el Ministerio de Salud. Sin embargo, sostiene que la Superintendencia no tiene competencia legal para sancionar por una eventual infracción a las normas a las que se refieren los decretos ya mencionados del Ministerio de Salud.

Alega que el último inciso del artículo 48 de la Ley N° 20.529 establece que si la Superintendencia toma conocimiento de infracciones a otras normas legales que no integran la normativa educacional deberá informar a los órganos fiscalizadores correspondientes, sin poder iniciar procesos sancionatorios por infracciones a normas legales ajenas la normativa educacional, por lo que concluye que su facultad sólo es para fiscalizar, mas no para sancionar. Indica que, si se permite a la Superintendencia sancionar por eventuales incumplimientos de la norma sanitaria, implicaría ello una infracción al principio *non bis in idem*, además de vulnerar el principio de legalidad.

En segundo lugar, alega que existe una infracción al principio de tipicidad y de fundamentación de las resoluciones administrativas sancionatorias. Señala que el cargo N° 2 está fundado en normas y bienes jurídicos de la misma naturaleza que los que sustentan el cargo N° 1; sin embargo, el cargo N° 1 fue calificado como "leve", mientras que el cargo N° 2 fue calificado como "menos grave".

Sostiene que el principio de tipicidad es aplicable al derecho administrativo sancionador, aunque sea de una manera matizada.

En el caso, indica que la infracción corresponde a una menos grave, pero sin argumentar dicha decisión para el caso concreto, y sin tampoco demostrar la afectación concreta al derecho de algún miembro de la comunidad educativa ocurrida al, supuestamente, no tener un cierre perimetral en la totalidad del patio de servicio.

Concluye que, si bien la determinación concreta de la calificación de una infracción ya sea grave, menos grave o leve corresponde a la Superintendencia, en virtud de las facultades legales otorgadas por los artículos 48 y 49 de la Ley N° 20.529, ella debe ejercer dichas facultades dentro de la legalidad, según lo dispuesto por el artículo 7° de la Constitución Política de la República.

Pide, en definitiva, que se acoja el presente reclamo y, en su mérito, se declare la ilegalidad de la Resolución Exenta N° 1.191 de la Superintendencia de Educación Metropolitana, que rechazó el recurso de reclamación administrativa interpuesto confirmando la aplicación de una sanción de multa de



60 Unidades Tributarias Mensuales, la que considera improcedente por las ilegalidades denunciadas.

SEGUNDO: Que la parte reclamada, la Superintendencia de Educación Metropolitana, solicita el rechazo del recurso de reclamación en todas sus partes.

Prevía relación de los hechos materia del proceso administrativo sancionador aborda las alegaciones del reclamante.

En cuanto a la supuesta incompetencia de la Superintendencia para aplicar la sanción cuestionada, hace presente que la recurrente no objeta en su reclamación judicial las razones expuestas por la Superintendencia de Educación para confirmar los cargos Nos. 1 y 2 formulados, resultando pacífico el hecho infraccional detectado en acta de fiscalización; sino que alega la existencia de ilegalidades en el procedimiento con el fin de dejar sin efecto la sanción aplicada.

Hace presente, además, que la recurrente reitera en su reclamación las mismas alegaciones efectuadas en el proceso administrativo y que fueron rechazadas.

Luego expresa que, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 20.529, es objeto de la Superintendencia fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional por parte de los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado. Esta atribución se complementa con lo dispuesto en el artículo 49 de la misma ley, que faculta a la Superintendencia para fiscalizar el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional (artículo 49 letra k) e imponer las sanciones correspondientes por infracción a la normativa educacional (letra l, de la citada norma).

Asimismo, señala que la Ley N° 20.370 General de Educación (LGE) establece en su artículo 10 letra f) párrafo 2°, el deber de todos los sostenedores de cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional, requisitos que se encuentran descritos en el artículo 46 de dicha ley y se reglamentan en el Decreto Supremo N° 315, de 2010, del Ministerio de Educación. Específicamente, el artículo 46 letra i) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, señala que entre los requisitos que deben cumplir los establecimientos educacionales para obtener el reconocimiento oficial se encuentra acreditar que el local en el cual funciona el establecimiento cumple con las normas de general aplicación previamente establecidas.



Añade que el artículo 15 del Decreto Supremo N° 315, de 2010, del Ministerio de Educación, dispone que el sostenedor deberá acreditar que el local del establecimiento educacional cumple con la normativa vigente en materia de infraestructura contenida en el Decreto Supremo N° 548, de 1988, del Ministerio de Educación y que deberá acreditar que el local reúne las condiciones sanitarias mínimas exigidas por el Ministerio de Salud, acompañando el informe respectivo otorgado por el organismo competente.

En este sentido, argumenta que el Decreto Supremo N° 548 referido establece la competencia de la Superintendencia de Educación para fiscalizar el cumplimiento de las exigencias en infraestructura, equipamiento y mobiliario por parte de los establecimientos educacionales. En particular, respecto a las condiciones de higiene y seguridad, el artículo 2° del citado decreto indica que en todo momento la Superintendencia podrá fiscalizar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el Decreto N° 289, de 1989, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias mínimas de los establecimientos educacionales, sin perjuicio de la fiscalización que ejerza el Ministerio de Salud en el ámbito de su competencia.

Respecto a la vulneración del principio de legalidad, reitera que la Superintendencia actuó dentro del marco de sus atribuciones legales al fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional, y que la sanción impuesta se sustenta en disposiciones expresas relativas a infraestructura y condiciones sanitarias de los establecimientos educacionales, contempladas en el Decreto Supremo N° 548 de 1988, el Decreto Supremo N° 289 de 1989 del Ministerio de Salud, el Decreto Supremo N° 47 de 1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ordinario N° 156 de 2014 y la Circular N° 1 de 2014, ambos de la Superintendencia de Educación.

En relación con el cargo N° 1 señala que, según consta en el Acta Original de Fiscalización, la entidad sostenedora mantenía en los baños del establecimiento dos servicios higiénicos en mal estado que no funcionaban, en el "baño central" se observó un servicio higiénico sin agua y dos lavatorios sin llaves de agua, en el "baño de los docentes varones" faltaban dos puertas y en el "baño del gimnasio" faltaba una llave de agua para el lavatorio. A la época de la fiscalización de seguimiento, la entidad sostenedora indicó que las llaves no habían sido cambiadas, por cuanto las recibidas por la Dirección no eran las originales y que uno de los baños persistía inoperativo.

Argumenta que la infracción a las disposiciones sobre mantención y funcionamiento de los servicios higiénicos atenta contra la seguridad de la



comunidad escolar, ya que puede generar riesgos sanitarios, exponiendo a estudiantes y trabajadores a condiciones insalubres. La falta de limpieza, el deterioro de los artefactos y la ausencia de medidas para evitar la presencia de vectores de interés sanitario pueden facilitar la propagación de enfermedades. Además, este incumplimiento afecta la salud y el bienestar general de la comunidad educativa, creando un ambiente de incomodidad y estrés que impacta negativamente en el desarrollo y la experiencia educativa de los alumnos.

Respecto al cargo N° 2, a su juicio no desvirtuado, indica que consta en el acta de fiscalización que las paredes y el cielo de la sala de profesores del colegio presentaba signos de humedad, como el muro de la escalera del edificio antiguo que se encontraba a la entrada de la sala de profesores. También se detectó que el cielo de la biblioteca se encontraba con la pintura descascarada y la techumbre donde estaba la caldera a gas se encontraba en mal estado, provocando filtración de agua en la sala de profesores y en la escalera del edificio antiguo.

Además, se constató la falta de un vidrio en el costado de la sala de profesores, dos vidrios en la puerta de la sala de profesores, y tres vidrios en la puerta de la sala de profesores, sector edificio antiguo; y se encontraban vidrios quebrados en el segundo piso detrás de la Dirección. Si bien la entidad sostenedora remitió fotografías de arreglos y limpieza de techos, no acreditó haber solucionado los problemas de humedad, pintura de la biblioteca, reparación del techo de caldera a gas ni haber repuesto los vidrios.

La reclamada sostiene que el artículo 9° del Decreto 548 ya referido exige que la estructura de los pisos, los muros, los cielos y la techumbre se encuentren en buen estado, a lo cual obedece al reproche de la autoridad por mantener muros y cielos con signos de humedad. Sin embargo, expresamente, indica que no deben presentar riesgo y deben garantizar la seguridad de los usuarios. Asimismo, el artículo 6° del Decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, refiere la exigencia de mantener las paredes interiores de los lugares de trabajo, los cielos rasos, puertas y ventanas en buen estado de limpieza y conservación.

En cuanto a la supuesta infracción al principio *non bis in idem*, la Superintendencia reclamada señala que no se configura tal vulneración, pues la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud no aplicó ninguna sanción al establecimiento educacional por el mismo hecho que motivó la decisión de la Superintendencia. Además, indica que la Superintendencia de Educación y el



Ministerio de Salud tienen competencias fiscalizadoras distintas y actúan en ámbitos normativos diferentes, por lo que la fiscalización y eventual sanción impuesta por la Superintendencia no constituye una reiteración punitiva de la actuación del Ministerio de Salud, sino el ejercicio legítimo de sus potestades para resguardar el cumplimiento de las normas educacionales.

Respecto a la alegada vulneración al principio de tipicidad y la solicitud de recalificación de la infracción, la reclamada sostiene que la calificación de una infracción corresponde a la Superintendencia, en virtud de las facultades legales otorgadas por los artículos 48 y 49 de la Ley N° 20.529, particularmente la del literal m) de este último artículo, que le atribuye la facultad de "aplicar e interpretar administrativamente la normativa educacional cuyo cumplimiento corresponde vigilar".

Argumenta que, al establecer los tipos infraccionales, la Ley N° 20.529 contempla definiciones en los artículos 77 letra c) y 78, las que son de carácter residual por cuanto definen el tipo infraccional de manera negativa, es decir, señalan que determinadas faltas se considerarán tales siempre y cuando no pertenezcan a otro tipo de infracción. En el caso de las infracciones menos graves, dice que lo serán cuando no sean calificadas como graves; mientras que, en el caso de las leves, establece que lo serán cuando no tengan señalada una sanción especial.

Pide, en definitiva, rechazar en todas sus partes la reclamación judicial deducida, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que la Municipalidad de Santiago, en su calidad de sostenedor de un establecimiento educacional, interpuso un reclamo de ilegalidad en contra de la resolución dictada por la Superintendencia de Educación, mediante la cual se le impuso -en conformidad a lo dispuesto en el artículo 73 letra b) de la Ley N° 20.529- una sanción de multa de 60 Unidades Tributarias Mensuales por dos infracciones, una calificada como leve del artículo 78 de la Ley N° 20.529; y otra menos grave, del artículo 77 letra c) del mismo cuerpo legal en conformidad al objeto y las atribuciones contempladas respectivamente en los artículos 48 y 49 letra m) de la Ley N° 20.529. Dicha sanción fue impuesta a propósito de un procedimiento administrativo de fiscalización, en el cual se formularon y persistieron dos cargos: el primero, por contravención al artículo 13 del Decreto Supremo N° 289 de 1989 y al artículo 22 del Decreto Supremo N° 594, de 1999, ambos del Ministerio de Salud, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el uso de los servicios higiénicos de un establecimiento educacional; y el segundo, por contravenir lo



dispuesto en el artículo 9 N° 2 del Decreto Supremo N° 548, de 1988, del Ministerio de Educación y el artículo 6 del Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, por presentar el establecimiento educacional infraestructura riesgosa, en mal estado de conservación y limpieza.

La Municipalidad reclamante sostiene, en síntesis, que la resolución sancionatoria adolece de ilegalidad por cuatro motivos: (i) por falta de competencia sancionatoria de la Superintendencia; (ii) por infracción a la legalidad administrativa en el procedimiento; (iii) por vulneración del principio *non bis in idem*; y (iv) por desconocimiento del principio de tipicidad en la calificación de las infracciones y en la aplicación de las sanciones.

CUARTO: Que la Ley N° 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización, establece en su artículo 48 que el objeto de la Superintendencia de Educación es fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia y que denomina normativa educacional. La misma norma, en su inciso final, previene que la Superintendencia no podrá iniciar procesos sancionatorios por infracciones a normas legales que no integran la normativa educacional. Adicionalmente, el artículo 49 del mismo cuerpo legal contempla las atribuciones y potestad sancionatoria de la Superintendencia, entre las que destacan, en lo pertinente: (i) poder fiscalizar que los establecimientos educacionales y sus sostenedores reconocidos oficialmente cumplan con la normativa educacional (letra a), (ii) Ingresar a los establecimientos educacionales y dependencias del sostenedor que tengan relación con la administración del establecimiento educacional, a objeto de realizar las funciones que le son propias (letra d), (iii) Recibir reclamos (letra h), (iv) Formular cargos, sustanciar su tramitación y resolver los procesos que se sigan respecto de todos los incumplimientos o infracciones a la normativa educacional (letra i), (v) Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional y, cuando corresponda, remitir los antecedentes al Ministerio de Educación para que éste, proceda a la revocación de tal reconocimiento (letra k), (vi) Imponer las sanciones correspondientes por infracción a la normativa educacional (letra l), y (vii) Aplicar e interpretar administrativamente la normativa educacional cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones fundadas de



general aplicación al sector sujeto a su fiscalización, sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias del Ministerio de Educación (letra m).

La referida ley contempla además, en sus artículos 73 letra b) y 76 a 78, la potestad de imponer una multa por infracciones administrativas a la normativa educacional en que incurran los sostenedores, distinguiendo entre infracciones leves, menos graves, y graves, con los respectivos márgenes de multa aplicables (respectivamente, 1 a 50 UTM, 51 a 500 UTM y 501 a 1000 UTM).

QUINTO: Que la alegación de que la Superintendencia de Educación carecería de competencia para imponer sanciones debe ser desestimada, desde que dicha potestad le ha sido conferida expresamente por el legislador en los artículos 48 y 49 de la Ley N° 20.529. A lo que se suma que el Decreto Supremo N° 315, de 2010, del Ministerio de Educación, dispone en su artículo 15 que: "El sostenedor deberá acreditar que el local del establecimiento educacional, sea urbano o rural, cumple con la normativa vigente en materia de infraestructura, contenida en el Decreto Supremo N° 548, de 1988, del Ministerio de Educación o aquel que en el futuro lo reemplace.

En especial, deberá acreditar que el inmueble cumple con los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones acompañando al efecto el certificado de recepción definitiva o parcial extendido por la Dirección General de Obras Municipales de la comuna en que se ubica el establecimiento educacional, o por la autoridad que corresponda en las comunas que no cuenten con dicha Dirección.

Igualmente, deberá acreditar que el local reúne las condiciones sanitarias mínimas exigidas por el Ministerio de Salud, acompañando el informe respectivo otorgado por el organismo competente."

La distinción propuesta por la reclamante entre competencia para fiscalizar y competencia para sancionar no tiene asidero normativo, toda vez que la función sancionadora de la Superintendencia es un complemento necesario de su rol fiscalizador, en el marco del aseguramiento de la calidad educativa; y tampoco se sostiene pues, por los Decretos Supremos N° 315 y N° 548 ya aludidos y ambos de Educación, por remisión, las obligaciones de infraestructura aplicables a las instituciones educacionales forman parte de la normativa educacional; y, de la misma forma, por referencia del mencionado Decreto Supremo N° 315, también se comprende en ella el cumplimiento de las condiciones sanitarias mínimas exigidas por el Ministerio de Salud, en lo que atañe a tales establecimientos. La potestad sancionadora de la



Superintendencia se refrenda, además, si en los hechos fiscalizados se observan elementos que pueden poner en riesgo la seguridad y/o la salud de las personas.

En este orden de ideas, el artículo 49 letra l) de la Ley N° 20.529 dispone que la Superintendencia de Educación podrá “(i)mponer las sanciones correspondientes por infracción a la normativa educacional”; y el artículo 73 de la misma ley detalla las conductas reprochables, su calificación y las sanciones aplicables, incluyendo desde revocación del reconocimiento oficial del Estado, pasando por privación de subvenciones, amonestación por escrito y ciertamente, también, multas.

De esta forma, no puede sostenerse que la autoridad administrativa haya actuado fuera del ámbito de su competencia.

SEXTO: Que la Municipalidad reclamante no ha descrito en términos concretos ni ha acreditado de manera irrefragable alguna actuación específica de la Superintendencia reclamada que vulnere el principio de legalidad administrativa durante el procedimiento sancionatorio. Por el contrario, del examen de los antecedentes consta que se cumplió debidamente con las etapas establecidas en el artículo 50 de la Ley N° 20.529.

En efecto, se formularon cargos, se concedió plazo a la reclamante para presentar sus descargos y adjuntar pruebas, se evaluaron los antecedentes y se dictó finalmente una resolución fundada, que se le notificó conforme a derecho, con respecto a la cual pudo impetrar los medios de impugnación que la ley le franquea. Aún más, la resolución sancionatoria que se reclama contiene una exposición detallada de los hechos acreditados, de la normativa aplicable, el análisis de los descargos presentados por la Municipalidad reclamante, y la fundamentación para calificar las infracciones constatadas y graduar las sanciones que impone, dentro del marco que permite la ley.

Todas, razones por las que esta Corte no advierte ilegalidad alguna en el proceder de la Superintendencia de Educación.

SÉPTIMO: Que la reclamante sostiene que habría sido sancionada con infracción del principio *non bis in idem*. Sin embargo, su afirmación está lejos de aparecer apropiadamente fundada en su reclamo y que amalgama, por una parte, su ya desestimada tesis sobre falta de competencia; y, por otra, la mera circunstancia de que existan otros organismos con competencias administrativas concomitantes en razón de una materia de carácter transversal, como es el caso del estado de mantenimiento de infraestructura o condiciones sanitarias; pero que, olvida la Municipalidad reclamante, se diferencian en razón



de los objetivos particulares que la ley asigna a cada organismo en su respectiva esfera.

La alegación de vulneración del principio en comento tampoco se sostiene si se la examina a la luz de los antecedentes acompañados al proceso, desde que no consta que algún otro organismo de competencia concomitante, como por ejemplo la Secretaría Regional Ministerial de Salud, haya efectivamente aplicado alguna sanción al establecimiento educacional sostenido por la Municipalidad reclamante por los mismos hechos que motivaron la decisión de la Superintendencia de Educación.

En este orden de ideas, no huelga recalcar que la Superintendencia de Educación y el Ministerio de Salud tienen competencias fiscalizadoras distintas y actúan en ámbitos normativos diferentes, por lo que la fiscalización y eventual sanción impuesta por la Superintendencia no constituye una reiteración punitiva de la potencial actuación del Ministerio de Salud en su propia esfera de competencias, sino el ejercicio legítimo de las potestades de la Superintendencia de Educación para resguardar el cumplimiento de las normas educacionales.

OCTAVO: Que, por último, cabe examinar la pretendida vulneración del principio de tipicidad. Al respecto, en el ámbito sancionatorio administrativo, este principio exige que las conductas sancionadas estén previamente descritas en la ley o en el reglamento respectivo, y que la calificación de su gravedad sea razonable y fundada.

En el presente caso, las conductas reprochadas se subsumen adecuadamente en las hipótesis legales invocadas por la Superintendencia y que sancionan el incumplimiento de las normas sobre infraestructura y condiciones sanitarias mínimas. La resolución recurrida expone, con razonabilidad, los motivos por los cuales un cargo fue calificado como infracción leve y el otro como infracción menos grave, atendida la extensión del deterioro constatado, la afectación de la comunidad educativa, y el tiempo de subsanación requerido.

En relación con la calificación de las infracciones para efectos de la imposición de la multa como sanción, el artículo 78 de la Ley N° 20.529 dispone que son infracciones leves aquellas en que incurran los sostenedores contra la normativa educacional y que no tengan señalada una sanción especial, cuya multa puede imponerse entre 1 y 50 UTM; en tanto que el artículo 77 letra c) establece que es infracción menos grave el infringir los deberes y derechos



establecidos en la normativa educacional no calificados como infracción grave, pudiendo sancionarse con multa de 50 a 500 UTM.

Que, en sede contencioso-administrativa, no corresponde a esta Corte sustituir la calificación de las infracciones determinada por la autoridad administrativa, salvo que ésta sea manifiestamente irracional o arbitraria, lo que tampoco ha sido demostrado por la reclamante; máxime si la misma reclamante no ha desconocido los hechos consignados en las actas de fiscalización y de seguimiento que dieron origen a un procedimiento sancionatorio ajustado a la ley que, en definitiva, constató las infracciones administrativas de autos, y a las que se sancionó con una multa dentro del marco previsto por la ley.

En efecto, en el caso de autos la multa única de 60 UTM responde a dos infracciones administrativas de distinta entidad, una calificada leve y la otra como menos grave, cuyo *quantum* conjunto no sólo se sitúa en el rango que la ley permite (hasta 500 UTM); sino que, incluso, fue determinada hacia el espectro mínimo de la multa posible asignada a la infracción de mayor entidad (50 UTM), tomando en cuenta el parámetro de matrícula total del establecimiento a la fecha de la infracción.

Por estas razones, no aprecia esta Corte una vulneración del principio de tipicidad, ni en la calificación de las infracciones ni en la determinación de las sanciones aplicadas; por lo que el reclamo interpuesto no podrá prosperar.

Por las consideraciones expuestas y las normas legales y reglamentarias invocadas, además de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 20.529, se resuelve que:

Se rechaza, en todas sus partes, el reclamo de ilegalidad interpuesto por la I. Municipalidad de Santiago en contra de la Resolución Exenta PA N° 1.191, de 29 de octubre de 2024, de la Superintendencia de Educación, por no configurarse los vicios alegados; resolución que, en consecuencia, no adolece de ilegalidad.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del abogado integrante señor Plaza.

N°Contencioso Administrativo-761-2024.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el abogado integrante señor Rafael Plaza Reveco. No firman el ministro señor Rodríguez por hacer uso de licencia médica ni el abogado integrante señor Plaza por encontrarse ausente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JKNXXUKMQQQ



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JKNXXUKMQQQ

Proveído por el Señor Presidente de la Séptima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a veinte de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JKNXXUKMQQQ